

La obligación legal de los partidos políticos de promover la participación democrática y la igualdad entre hombres y mujeres ¿Acciones efectivas o dispendio?

Political parties: their legal obligation to promote democratic participation and gender equality. Effectiveness or wastefulness?

Autor: José Gabriel de la Paz Sosa

Coautor: Daniela Ramos Cardoso

Resumen:

La presente ponencia presenta los resultados de un ejercicio de evaluación de los Programas Anuales de Trabajo que los partidos políticos, de diez estados de la República Mexicana, entregaron al INE en 2016. Con base en esta evidencia podemos inferir que los partidos no satisfacen criterios mínimos de calidad en el cumplimiento de esta obligación legal; y, por lo tanto, es improbable que sus acciones tengan impacto en la promoción de la participación democrática y del liderazgo político de las mujeres.

Propuesta:

Los partidos políticos están legalmente obligados a destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciben, para *actividades específicas*;^{*} y el tres por ciento para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Para garantizar que los partidos ejerzan efectivamente los recursos etiquetados de acuerdo con los propósitos establecidos en la ley, el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral define una serie de requisitos que los partidos están obligados a cumplir. Entre ellos está la elaboración y presentación ante la autoridad electoral de dos Programas Anuales de Trabajo (PAT), uno para actividades específicas y otro para la promoción del liderazgo político de las mujeres. Los PAT deben describir los proyectos y especificar objetivos, metas, indicadores, actividades y presupuesto.

Una correcta planeación es condición necesaria para que los recursos públicos destinados a fortalecer la participación democrática generen resultados favorables. Por lo tanto, es válido inferir que, si la planeación es deficiente, la probabilidad de que los partidos realmente promuevan cambios es mínima y, por lo tanto, no se justificaría el gasto de recursos públicos.

^{*} Es decir, educación, capacitación, investigación y difusión que tengan como propósito fortalecer la participación política, los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos, entre la militancia y la ciudadanía en general. Además, de acuerdo con la Ley general de Partidos Políticos (LGPP), las actividades específicas reciben financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias.

Nuestra ponencia presenta los resultados de un ejercicio básico de evaluación de los PAT que los partidos políticos de diez estados entregaron al INE en 2016. Estos resultados nos permiten inferir de manera general que los partidos políticos no están cumpliendo sus obligaciones legales y no satisfacen criterios mínimos de calidad en este tema.

Consideramos que este ejercicio descriptivo, aunque parcial, es valioso porque presenta información derivada de observación directa y pone en la mesa evidencia que contribuye a la discusión sobre el desempeño de los partidos políticos y la efectividad de las normas que los regulan.